LITORALPRESS

Fecha: 02-03-2026
Medio: Le Monde Diplomatique
Supl. : Le Monde Diplomatique
Tipo: Noticia general
Título: **Decantando logrps y fracasos de a la evidencia**

Pág. : 7
Cm2: 735,0
VPE: $ 1.382.566

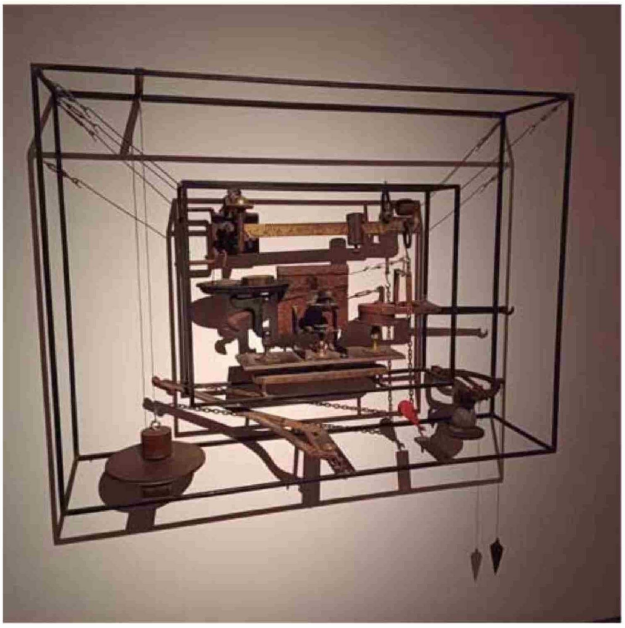
Tiraje: 6.200
Lectoría: 18.600
Favorabilidad: No Definida

Chile 2022–2026

Decantando logros y fracasos de cara a la evidencia

por Álvaro Ramis*

El ciclo político chileno abierto en 2022 con la llegada al gobierno de Gabriel Boric nació como promesa de recomposición: traducir la energía plebeya de 2019 en reformas institucionales y derechos sociales dentro del marco democrático. Cuatro años después, el triunfo de la derecha radical encabezada por José Antonio Kast ha sido leído como prueba concluyente del fracaso progresista. Sin embargo, esa lectura descansa más en un relato político dominante que en la evidencia empírica disponible. Entre la percepción de declive y los datos de desempeño se abre una brecha que resulta clave para comprender el desenlace del período.



Claudio Muñoz Oyarce, *Bodegón basculante II -inerte* (acero dulce, bronce, arena), 2021-2025 (Exposición en el MAVI UC hasta el 15 de marzo)

El doble fracaso constitucional condensó una erosión real de la comunidad política. El rechazo del texto de la Convención en 2022 y del Consejo en 2023 mostraron la incapacidad de articular un marco universalista que integrara justicia social y pertenencia nacional. El progresismo perdió la narrativa de transformación; la derecha radical ganó la de orden frente al caos. Pero esa derrota simbólica coexistió con un fenómeno menos visible: en paralelo al colapso del consenso constitucional, varios indicadores estructurales comenzaron a revertir tendencias negativas acumuladas desde 2019 y, sobre todo, desde la pandemia.

Una de las debilidades del debate público chileno reciente ha sido la ausencia de perspectiva temporal. Problemas estructurales -violencia creciente, deterioro fiscal postpandemia, rezago educativo- fueron atribuidos mecánicamente al gobierno de Boric, pese a originarse antes de 2022. El contraste entre relato y series largas muestra otra imagen: el período 2022–2025 coincide con puntos de inflexión en inflación, empleo, seguridad, salud y educación. No se trata de niveles absolutos -aún críticos en varios ámbitos- sino de cambios de tendencia.

En economía, el gobierno asumió en el peak inflacionario heredado de la expansión de liquidez 2020–2021, con tasas cercanas al 14 % en 2022. Desde entonces, la inflación descendió sostenidamente hacia el rango meta del Banco Central, acompañada por una consolidación fiscal significativa respecto del déficit récord de 2021. Lejos del estancamiento proclamado por la oposición, las proyecciones del FMI y la OCDE para 2024–2025 situaron el crecimiento chileno por sobre el promedio de América Latina, de la OCDE y del mundo excluyendo China e India. La estabilización macroeconómica y la recuperación de la inversión configuraron un ciclo de normalización tras el sobrecalentamiento previo.

En el mercado laboral, los ocupados y la participación recuperaron y superaron niveles pre-2019, mientras reformas como la jornada de 40 horas y el aumento del salario mínimo fortalecieron la base distributiva sin el deterioro del empleo anticipado por críticos. El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo alcanzó máximos históricos, síntesis de crecimiento, empleo y estabilidad de precios. Sin embargo, estos avances no se tradujeron en percepción social equivalente: el endeudamiento de hogares y la precariedad persistente mantuvieron la experiencia cotidiana de inseguridad material.

Disociaciones

Algo similar ocurrió en políticas sociales. En salud, las listas de espera y tiempos quirúrgicos -que habían alcanzado su peak pandémico en 2021- descendieron de forma sostenida desde 2022, incluso por debajo de niveles de 2019. En educación, la deserción escolar -disparada en la pandemia- cayó hasta mínimos históricos en 2024, mientras evidencia de la Agencia de Calidad mostró mejores resultados SIMCE en establecimientos traspasados a Servicios Locales de Educación Pública. El Plan de Emergencia Habitacional avanzó cerca de su meta total.

En términos de políticas públicas, el período muestra recuperación de capacidades estatales tras el shock sanitario. En términos de narrativa política, predominó la imagen de deterioro.

La seguridad pública constituye el caso más elocuente de esta disociación. Las víctimas de homicidio aumentan desde 2019, alcanzan su máximo en el primer semestre de 2022 y disminuyen posteriormente. En la macrozona sur, la violencia creció entre 2018 y 2021 y cayó cerca de 70 % entre 2022 y 2024. Este cambio de tendencia se vinculó a un fortalecimiento institucional -nuevas leyes, mayor presupuesto, modernización policial-, pero quedó invisibilizado por la persistencia de niveles aún altos y por el impacto simbólico de episodios como el asesinato del carabinero Daniel Palma en 2023. La oposición logró fijar el marco interpretativo: inseguridad estructural sin matices temporales.

Así, el gobierno operó en un contexto político-institucional particularmente adverso: inflación global, secuelas fiscales de la pandemia, Congreso fragmentado y bloqueo parlamentario de reformas estructurales. Aun así, tras un primer año de desajustes, estabilizó su coalición, amplió acuerdos legislativos y sostuvo gobernabilidad. En perspectiva comparada, mantener continuidad institucional y estabilidad macroeconómica bajo estas restricciones constituye un logro relevante. Pero la política contemporánea no se decide solo por resultados, sino por significados.

La mutación decisiva del período fue simbólica: el eje del debate se desplazó desde derechos sociales hacia seguridad, identidad y frontera. La crisis moral del progresismo tras el caso de transferencias irregulares a fundaciones en 2023 erosionó credibilidad; la crisis migratoria en el norte reforzó percepciones de pérdida de control; los conflictos sectoriales fragmentaron la idea de pueblo en intereses corporativos. En ese terreno, la derecha radical ofreció claridad moral y pertenencia simple donde el progresismo ofrecía complejidad técnica. La brecha entre relato y datos se resolvió políticamente a favor del relato.

El triunfo de Kast en 2025–2026 cristalizó esta disociación. No fue solo el resultado de miedos sociales, sino de haber capturado la demanda de comunidad bajo formas directas: seguridad como bien primario, nación como frontera cultural, mercado como árbitro de mérito. Su éxito no radicó en negar los avances del período, sino en volverlos irrelevantes frente a la experiencia de inseguridad simbólica. Allí donde el gobierno mostraba inflexiones estadísticas, la oposición mostraba niveles percibidos. La política se inclinó hacia la percepción.

Paradoja central

El balance del ciclo 2022–2026 revela así una paradoja central: un gobierno capaz de revertir tendencias negativas heredadas en múltiples dimensiones fue simultáneamente percibido como fracaso. La explicación no reside en la falsedad de los datos ni en la ilusión del relato, sino en la ruptura entre desempeño material y sentido colectivo. Cuando la razón pública se tecnocratiza y la experiencia social permanece insegura, los logros no construyen comunidad política.

La tarea pendiente del progresismo no es negar sus límites ni refugiarse en indicadores favorables, sino reconstruir la mediación entre evidencia y pertenencia: ligar igualdad material con reconocimiento mutuo, seguridad objetiva con seguridad percibida, políticas públicas con narrativas compartidas. El Chile progresista dispone de recursos -tradición municipalista, memorias de solidaridad, economías regionales cooperativas- pero carece de un relato común inteligible para quienes viven la fragmentación cotidiana.

El ciclo de Gabriel Boric no fue simplemente un gobierno frustrado ni un éxito oculto por la propaganda adversa. Fue el síntoma de una época en que los datos dejaron de producir sentido político. Y el triunfo de José Antonio Kast no es solo una victoria ideológica, sino la expresión de una demanda de pertenencia que la evidencia, por sí sola, no puede satisfacer. Entre tecnocracia y tribu, la alternativa sigue abierta: una libertad solitaria -administrada por expertos o custodiada por el orden- o una libertad compartida, tejida en la experiencia reconocible de iguales. Solo en esta última la democracia deja de ser balance y vuelve a ser promesa. ■

*Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano